

**A LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE MADRID, Dña. Mercedes González Fernández.**

con DNI nº 42058790R, como Vicepresidente de la
Asociación de defensa de los derechos fundamentales ELEUTERIA, con CIF nº G-67720243, y
domicilio a efectos de notificaciones, en la Calle
con Tfno.: correo electrónico
MAFESTO:

Primera.- Hemos constatado, que en la página web de este Consorcio (www.ifema.es), se anuncian una serie de eventos y ferias, en los que se impone como requisito de acceso, el certificado COVID digital de la UE o QR Spain Travel Health, y en defecto de ello, certificado test Covid 19 negativo, realizado en las 24 horas anteriores a su primer acceso.

Es de público conocimiento, que la exigencia del certificado COVID, o la imposición de una prueba test para el COVID 19, constituyen medidas restrictivas de los derechos fundamentales.

Por ello, la obligatoriedad de una medida de este tipo, requiere norma aprobada por la Comunidad Autónoma, y refrendo judicial. En este caso, no concurre norma autonómica ni refrendo judicial (condición éste para la apropiada existencia de la restricción).

Segunda.- Efectivamente, tras el levantamiento del estado de alarma, el Gobierno Central, por Real Decreto 8/2021, de 4 de Mayo, vino a establecer la posibilidad de que las comunidades autónomas adoptaran medidas excepcionales, con motivo de la pandemia, y con fundamento en la Ley Orgánica 3/1986 Ley Orgánica 3/1986, de 14 de Abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, exigiendo, cuando se tratara de medidas restrictivas de derechos fundamentales, la autorización o ratificación judicial.

Se establece la posibilidad de que las Comunidades Autónomas impongan, por razones sanitarias, y en base a la Ley Orgánica 3/1986 y a las Leyes Ordinarias 3/2011 y 14/1986, medidas restrictivas de derechos fundamentales, sujetas siempre al previo control judicial.

Establece la Sala Tercera del Tribunal Supremo (por todos, ATS 20 de Mayo de 2021 ó 3 de Junio de 2021) que Estos procesos tienen por objeto la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.

La STS 1112/2021, de 14 de septiembre señala:

«Por otro lado, viene al caso recordar, para clarificar esta cuestión, que ya nos hemos pronunciado sobre la eficacia de las medidas sanitarias adoptadas por la Administración y sometidas a la ratificación judicial, prevista en los artículos 10.8 y 11.1.i) de la LJCA, que no pueden ser aplicadas por la Administración antes de que la Sala de lo Contencioso Administrativo correspondiente se pronuncie al respecto. En este sentido, en los Autos de 20 de mayo de 2021 (recursos de casación n.º 3417, 3425 y 3473 de 2021), hemos declarado que los citados preceptos de nuestra Ley Jurisdiccional exigen la previa autorización o ratificación previa por parte de la Sala de instancia para que tengan eficacia. Quiere esto decir que la medida sanitaria adoptada por la Administración autonómica o estatal no puede desplegar sus efectos antes de que haya sido ratificada judicialmente. En definitiva, la ratificación prevista en esos preceptos no es una convalidación o confirmación por parte del órgano judicial de un acto de la Administración que ya reúne todas las condiciones legalmente requeridas para ser eficaz. No. Estamos ante una medida que no puede ser aplicada durante el tiempo que media entre su adopción por la Administración y el pronunciamiento judicial sobre su autorización o ratificación, resultando irrelevante a tales efectos la suspensión acordada en sede administrativa. Y desde luego queda a salvo la impugnación ordinaria de este tipo de medidas»

Por tanto, no existe duda de que cualquier restricción a los derechos fundamentales exige norma autonómica refrendada judicialmente y hasta que se produzca el citado refrendo judicial, las medidas limitativas de derechos fundamentales carecen de toda eficacia.

Tercera.- La exigencia del certificado o de una prueba test sin la citada cobertura, supone una actuación manifiestamente ilegal, y posiblemente constitutiva de diversos ilícitos penales (entre otros, arts. 172 y 512 del Código Penal).

Hay que recordar que en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de Noviembre de 2021, los técnicos de Sanidad y de las Comunidades Autónomas informaron sobre la inutilidad del certificado covid para evitar contagios, única finalidad legítima de este documento restrictivo de derechos, dada la voluntariedad de la vacunación en España, tal y como ha proclamado el Tribunal Constitucional (y ello sin olvidar que no estamos ante una vacuna propiamente dicho, sino ante un medicamento en fase experimental)

<https://elpais.com/sociedad/2021-12-01/los-tecnicos-de-sanidad-y-las-comunidades-desmontan-la-utilidad-del-certificado-covid-para-frenar-la-sexta-ola.html>

Hemo para que de forma inmediata dejen sin efecto la citada medida restrictiva de derechos fundamentales, manifiestamente nula e ilegal y posiblemente constitutiva de un ilícito penal.

En caso de que no sea así, procederemos a interponer querrela criminal en los próximos días.

En su virtud.

SOLICITO tenga por presentado este escrito, y puestos en conocimientos los hechos contenidos en el mismo a los efectos oportunos.